

Opinión

Si se sumaran los resultados fiscales de los últimos 60 años, el sector público nacional argentino acumularía un déficit del 264% del PIB.

Para que se entienda la magnitud, es casi tres veces lo que la economía argentina produce anualmente. De esas seis décadas, sólo hubo superávit fiscal en seis años, entre 2003 y 2008.

Hace 12 años que el sector público nacional no puede llegar a cubrir sus gastos con sus ingresos habituales, por lo que debe recurrir a otras fuentes, como el endeudamiento y la emisión monetaria, para afrontar las erogaciones comprometidas.

En ese contexto, y todavía con los coletazos de la pandemia del Covid-19, se mira con atención el comportamiento presupuestario del Gobierno durante este año en particular.

A riesgo de simplificar o condensar algunos debates, puede decirse que hay dos actores que observan la evolución de las cuentas públicas con intereses que, por lo menos en el corto plazo, aparecen como contrapuestos.

Por un lado, un sector que entiende que la trayectoria de la economía argentina requiere de un Estado grande y observan la reducción del déficit público como un ajuste.

En un año electoral, se suele dejar de lado la distinción entre gastos productivos, gastos necesarios, transferencias y asistencialismo; y cualquier manejo que controle las erogaciones es fustigado.

Por otro lado, están los sectores más apegados a la eficiencia en el gasto y al cumplimiento de una restricción presupuestaria, entre los que se encuentran los propios acreedores domésticos o externos.

Ellos prefieren que se les presente un rumbo que muestre que se generarán los excedentes fiscales necesarios para inversiones públicas productivas, para encarar la reducción de la elevada carga tributaria o el repago de los compromisos asumidos.

Se trata de elementos que en una mirada de más largo plazo permitieron a la mayoría de las economías de la región y del mundo el desarrollo y un mayor acceso al financiamiento para públicos y privados.

A unos no les molestaría un par de puntos del producto interno bruto (PIB) más de déficit. Los otros no verían con malos ojos que el presupuesto se acercara cada vez más al equilibrio.

La hoja de ruta actual

Desde la cartera de Economía nacional, se insistió en repetidas ocasiones en que el Presupuesto es el plan económico.

Según el Proyecto de Presupuesto nacional para 2022 seguiremos teniendo déficit primario y fiscal los próximos años. Concretamente, se estimó que en 2021 el déficit antes del pago de intereses (primario) será de 1,73 billones de pesos, equivalentes a 4% del PIB. Y que el año próximo no se podrá cubrir con los ingresos habituales los gastos primarios por un monto equivalente al 3,3% del PIB.

En este punto, conviene detenerse

LA ECONOMÍA

Los equilibrios sociales y económicos que no logramos



Ariel Barraud
Economista del Iaraf y docente de la UNC

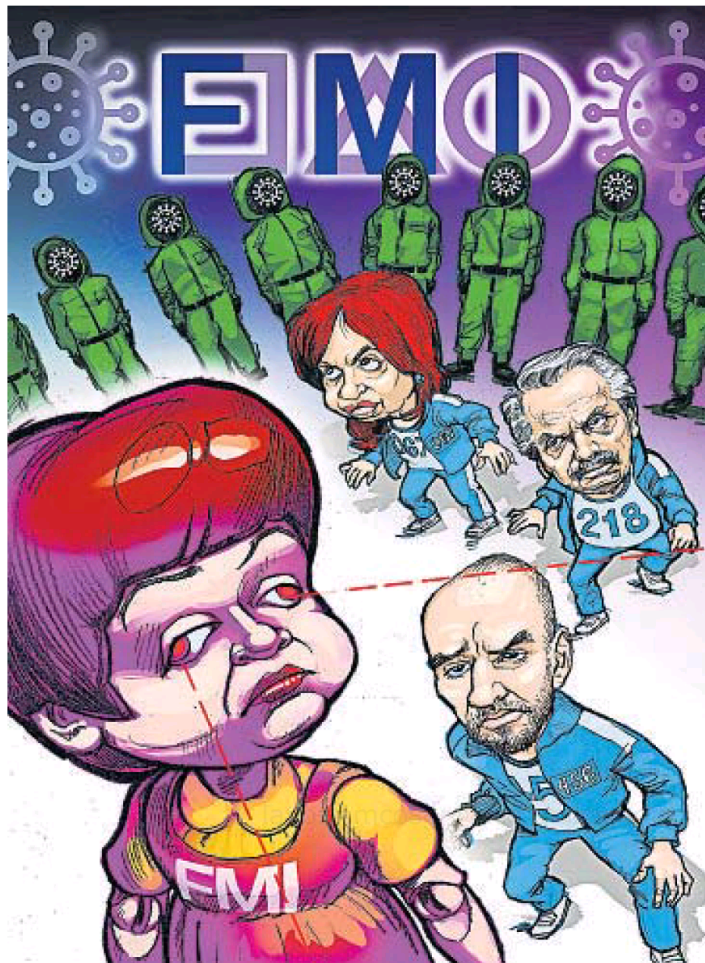


ILUSTRACIÓN DE ERIC ZAMPERRI

y analizar lo que se viene observando en el año en curso.

Los datos difundidos el miércoles pasado acerca de las cuentas nacionales, que abarcan el período de enero a septiembre, dan cuenta de un déficit primario acumulado del 1,3% del PIB.

En esta cuenta no se incluyen los ingresos por los Derechos Especiales de Giro (DEG) transferidos en septiembre por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la distribución global entre sus socios decidida por el organismo (por más que contablemente se registraron como un ingreso por un monto de 1%

del PIB). El aporte se trata de recursos extraordinarios que no están contemplados en los cálculos oficiales de cierre para 2021 en el proyecto de Presupuesto.

Es relevante que el comportamiento fiscal de los primeros nueve meses del año generó "solamente" un tercio de todo el déficit esperado oficialmente para 2021.

¿Esto implica que en los últimos tres meses del año asistiremos a un déficit equivalente a 2,7% del PIB, es decir, 1,17 billones de pesos de gasto primario por encima de los ingresos?

Luce improbable. Primero, porque los ingresos totales nacionales vie-

nen creciendo al 74% interanual, y para acomodarse a la pauta de ingresos prevista en el cierre fiscal deberían crecer al 41% en el último trimestre, es decir, caer en términos reales. Segundo, porque los que sí vienen cayendo en términos reales en lo que va del año son los gastos primarios (con las jubilaciones y los salarios públicos entre las principales caídas).

Para que se den los números oficiales, los gastos primarios tendrían que revertir fuertemente dicha baja y pasar a tener en el último trimestre una expansión nominal del 70%, equivalente a un aumento de más de

15 puntos sobre la inflación proyectada para el período.

Aun cuando en octubre y en noviembre los datos mostrarán un incremento en los gastos a causa de las presiones electorales, muchos de los cuales ya fueron anunciados y ejecutados en la carrera hacia el 14 de noviembre, para cumplir con el plan oficial la ejecución del gasto de capital debería pasar de crecer al 113% nominal, como lo vino haciendo hasta septiembre, a "explotar" en el último trimestre.

Debería resultar un 558% más alto que el ejecutado en igual período del año 2020.

El gasto en personal, asimismo, tendría que tener en el período octubre-diciembre un crecimiento del 104,3% (es decir, más que duplicar el gasto del último trimestre de 2020). Y las jubilaciones y las pensiones del mismo período deberían empatarle a la inflación esperada para lo que queda de 2021, siendo que hasta septiembre los precios le habían ganado la carrera por siete puntos.

Es así que el déficit primario quedará probablemente en la zona del 2,5% al 3% del PIB.

Debates sin consenso

Más allá del número final del déficit en 2021, lo cierto es que no habrá consenso general acerca de si la política fiscal fue expansiva o contractiva.

Algunos sostendrán que el déficit podría haber sido incluso mayor, que faltó gasto ("faltó Estado"); aun cuando se hilvanará el treceavo año consecutivo de déficit, con un tamaño del Estado récord en relación con una economía que no despega, incorporación de nuevos ingresos extraordinarios como el Aporte Solidario, y una fuerte emisión monetaria.

Respecto a este último punto, cabe recordar que el contexto de crisis del año pasado requirió de emisión de pesos por vía de adelantos transitorios y envío de utilidades contables desde el Banco Central (BCRA) hacia el Tesoro Nacional, que fondearon nada menos que el 31% del gasto primario nacional.

El guarismo, que en 2018 tocó su piso siendo solamente el 1%, este año podría llegar a ser el 16% si se utilizan los 1,2 billones de pesos del límite de esta asistencia. La consecuencia de la emisión monetaria en contextos en los que la actividad económica no crece al mismo ritmo es la inflación.

Desde la otra vereda se saludará como positivo que el déficit primario no trepe al 4% del PIB. Incluso cuando se haya logrado con una alta presión fiscal efectiva, y con un mix de gasto nacional tal que los jubilados y los pensionados hayan perdido poder de compra, o que el gasto de capital haya quedado en los anodinos niveles inferiores al 1,5% del PIB, como en 2018, 2019 y 2020.

El equilibrio social requiere debates y consensos acerca de un objetivo de bienestar común para el país. El equilibrio presupuestario es matemático. Pero alguna vez deben coincidir para que ambos sean sostenibles.

Alguna vez, el Presupuesto y el gasto social deberían coincidir para que ambos sean sustentables.